

EL GOBIERNO REGIONAL IMPIDE DURANTE MAS DE OCHO HORAS QUE DOS DIPUTADOS OBTENGAN COPIAS DE CONTRATOS SOBRE LAS ADJUDICACIONES DE RADIO Y TDT

El vicepresidente del Grupo Parlamentario Socialista, José Cepeda, y la portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, Livia Castillo, se encerraron el pasado lunes durante más de ocho horas en las dependencias de la Vicepresidencia del Gobierno regional hasta conseguir que se les proporcionaran copias de los expedientes de las adjudicaciones de los canales de TDT y de las frecuencias de FM en la región. Estos expedientes son públicos, y los diputados tienen derecho a inspeccionarlos y a obtener copia de los mismos según consta en el artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea.



"La fuerza de los medios de comunicación y la presión de los internautas, que se han movilizado, les ha hecho ceder, pero estoy indignado, porque éste es un expediente público", dijo Cepeda al salir de la sede autonómica. A juicio del vicepresidente del Grupo Socialista –que estuvo informando del encierro en tiempo real a través de la red social de Internet Twitter-, es "extraño" que la Comunidad de Madrid le haya puesto "tantas trabas" para darle esos expedientes, por lo que ha renovado su intención de "comprobar si esas adjudicaciones están dentro de los márgenes básicos de la legalidad".

"Esperanza Aguirre quiere un modelo de comunicación estilo "Álcazar" y piensa que lo mejor es adjudicar las licencias a sus amigos. Yo no digo que ahí se hayan cometido ilegalidades, sólo quiero investigarlo y comprobarlo", afirmó.

Por su parte, la diputada Livia Castillo criticó que Esperanza Aguirre cree que Sol es "su cortijo" y que se nota que el PP "lleva gobernando 15 años y cree que tienen total impunidad". En este sentido, defendió que "la oposición tiene derecho" a acceder a los documentos y "tienen que ejercer el control parlamentario". Asimismo, apoyó su argumentación en que el artículo 18.3 del Reglamento de la Asamblea de Madrid les da derecho a acceder a la documentación y a fotocopiarlos. Por último, destacó que el acceso a este informe es sólo el primer paso de la investigación, ya que ahora hay que investigar la adjudicación de licencias.

No es la primera vez que Cepeda y Castillo intentaban acceder a la documentación en cuestión. El primer intento se produjo la semana pasada. El personal de la Comunidad de Madrid adujo que Cepeda, que había solicitado acceso al expediente desde hacía más de un año, no podía ir acompañado de otra diputada.

LA MAYORÍA DEL PP VETA LA PREGUNTA A ESPERANZA AGUIRRE SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DEL CANAL DE ISABEL II

La mayoría del PP en la Mesa y en la Junta de Portavoces de la Asamblea ha vetado la pregunta que la portavoz socialista, Maru Menéndez, tenía previsto hacer a Esperanza Aguirre en el turno de control al Gobierno en el Pleno del próximo jueves. La pregunta está relacionada con la reanudación del proceso de privatización del Canal de Isabel II, por lo que Menéndez denuncia que "es evidente que al PP no le interesa que debatamos sobre la privatización del agua de todos los madrileños".

La pregunta vetada de Maru Menéndez es: "¿Continúa el Gobierno regional con el proceso de privatización del Canal de Isabel II?" El argumento del PP es que esta pregunta es "idéntica" a la formulada por el portavoz de IU, Gregorio Gordo, en el Pleno del pasado 18 de febrero. "No es cierto, porque el portavoz de IU preguntó si el Gobierno mantiene la intención de privatizar el Canal, mientras que mi pregunta es si continúa el proceso", explicó la portavoz. Es decir, Menéndez quería preguntar a Aguirre "si continúa con hecho ya iniciado, que no tiene nada que ver con el mantenimiento de una intención".

"La única intención clara es la del PP, que ha tratado de manipular en la Mesa", afirmó la portavoz. "Sin embargo, el PP no va a impedir que en todos los medios y foros dejemos de denunciar la privatización del agua de todos los madrileños, de un bien que es esencial y una señal de identidad para esta región".

Maru Menéndez recordó que "el proceso de privatización, lejos de proporcionar algún beneficio, va a hacer que el agua que hoy es de todos pase a ser solamente de los accionistas. Vamos a seguir insistiendo en este hecho tan grave. Queremos saber a qué manos privadas irá el agua de los madrileños, cuanto les va a costar a los ciudadanos y denunciar que no traerá ningún beneficio sino un deterioro de la calidad del agua".

Menéndez recordó, sin embargo, que el proceso de privatización del Canal ya le está costando dinero a los madrileños. En concreto, 1,4 millones de euros adjudicados a una serie de empresas en concepto de "asesoramiento económico, legal y sobre bienes patrimoniales" en relación a este proceso. "La gestión de un bien esencial como el agua no puede quedar sujeta a los vaivenes del mercado en una crisis económica como la que padecemos, y es una usurpación de un bien público que todavía es de todos los madrileños", afirmó.